

SESIONES ORDINARIAS

1999

ATENCION CONSULTAS

ORDEN DEL DIA N° 1840

COMISIONES DE COMERCIO, DE LEGISLACION
GENERAL, DE JUSTICIA Y DE PRESUPUESTO
Y HACIENDA

Impreso el día 8 de marzo de 1999

Término del artículo 113: 17 de marzo de 1999

SUMARIO: Ley de defensa de la competencia. Implementación.

1. Cambareri y otros. (311-D.-1998.)
2. Gabrielli y otros. (426-D.-1998.)

Dictamen de las comisiones

Honorable Cámara:

Las comisiones de Comercio, de Legislación General, de Justicia y de Presupuesto y Hacienda, han considerado los proyectos de ley de los señores diputados Cambareri y otros (311-D.-98) y el de los señores diputados Gabrielli y otros (426-D.-98) sobre modificación a la Ley Nacional de Defensa de la Competencia, y han tenido a la vista el proyecto de ley del señor diputado Flores (466-D.-98); y, por las razones expuestas en el informe que se acompaña y las que dará el miembro informante, aconsejan la sanción del siguiente

PROYECTO DE LEY

Senado y Cámara de Diputados, ...

LEY DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA

CAPÍTULO I

De los acuerdos y prácticas prohibidas

Artículo 1º — Están prohibidos y serán sancionados conformidad con las normas de la presente ley,

los actos o conductas de cualquier forma manifestados, relacionados con la producción e intercambio de bienes o servicios, que tengan por objeto o efecto limitar, restringir, falsear o distorsionar la competencia o el acceso al mercado o que constituyan abuso de una posición dominante en un mercado, de modo que pueda resultar perjuicio para el interés económico general.

Queda comprendida en este artículo, en tanto se den los supuestos del párrafo anterior, la obtención de ven-

tajas competitivas significativas mediante la infracción declarada por acto administrativo o sentencia firme, de otras normas.

Art. 2º — Las siguientes conductas, entre otras, en la medida que configuren las hipótesis del artículo 1º, constituyen prácticas restrictivas de la competencia:

- a) Fijar, concertar o manipular en forma directa o indirecta el precio de venta, o compra de bienes o servicios al que se ofrecen o demanden en el mercado, así como intercambiar de información con el mismo objeto o efecto;
- b) Establecer obligaciones de producir, procesar, distribuir, comprar o comercializar sólo una cantidad restringida o limitada de bienes, o prestar un número, volumen o frecuencia restringido o limitado de servicios;
- c) Repartir en forma horizontal zonas, mercados, clientes y fuentes de aprovisionamiento;
- d) Concertar o coordinar posturas en las licitaciones o concursos;
- e) Concertar la limitación o control del desarrollo técnico o las inversiones destinadas a la producción o comercialización de bienes y servicios;
- f) Concertar, impedir, dificultar u obstaculizar a terceras personas la entrada o permanencia en un mercado o excluirlas de éste;
- g) Fijar, imponer o practicar, directa o indirectamente, en acuerdo con competidores o individualmente, de cualquier forma precios y condiciones de compra o de venta de bienes, de prestación de servicios o de producción;
- h) Regular mercados de bienes o servicios, mediante acuerdos para limitar o controlar la investigación y el desarrollo tecnológico, la producción de bienes o prestación de servicios, o para dificultar inversiones destinadas a la producción de bienes o servicios o su distribución;
- i) Subordinar la venta de un bien a la adquisición de otro o a la utilización de un servicio, o subordinar la prestación de un servicio a la utilización de otro o a la adquisición de un bien;
- j) Sujetar la compra o venta a la condición de no usar o adquirir, vender o abastecer bienes o servicios producidos, procesados, distribuidos o comercializados por un tercero;
- k) Imponer condiciones discriminatorias para la adquisición o enajenación de bienes o servicios sin razones fundadas en los usos y costumbres comerciales;
- l) Rechazar injustificadamente la venta de bienes o la prestación de servicios;
- m) Limitar o impedir el acceso de nuevas empresas al mercado;
- n) Enajenar bienes o prestar servicios a precios inferiores a su costo, sin razones fundadas en los usos y costumbres comerciales y con la fina-

lidad de desplazar la competencia en el mercado o que produzca daños en la imagen o en el patrimonio o en el valor de las marcas de sus proveedores de bienes o de servicios.

Art. 3º — Quedan sometidas a las disposiciones de esta ley todas las personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, con o sin fines de lucro que realicen actividades económicas en todo o en parte del territorio nacional, y las que realicen actividades económicas fuera del país, en la medida en que sus actos, actividades o acuerdos puedan producir efectos en el mercado nacional.

A los efectos de esta ley, para determinar la verdadera naturaleza de los actos o conductas y acuerdos, atenderá a las situaciones y relaciones económicas que efectivamente se realicen, persigan o establezcan.

CAPÍTULO II

De la posición dominante

Art. 4º — A los efectos de esta ley se entiende que una o más personas goza de posición dominante cuando para un determinado tipo de producto o servicio es la única oferente o demandante dentro del mercado nacional o en una o varias partes del mundo o, cuando sin ser la única, no está expuesta a una competencia sustancial o, cuando por el grado de integración vertical u horizontal está en condiciones de determinar la viabilidad económica de un competidor o participante en el mercado, en perjuicio de éstos.

Art. 5º — A fin de establecer la existencia de posición dominante en un mercado, deberán considerarse las siguientes circunstancias:

- a) El grado en que el bien o servicio de que se trate, es sustituible por otros, ya sea de origen nacional como extranjero; las condiciones de tal sustitución y el tiempo requerido para la misma;
- g) El grado en que las restricciones normativas limitan el acceso de productos u oferentes o demandantes al mercado de que se trate;
- c) El grado en que el presunto responsable pueda influir unilateralmente en la formación de precios o restringir al abastecimiento o demanda en el mercado y el grado en que sus competidores puedan contrarrestar dicho poder.

CAPÍTULO III

De las autorizaciones

Art. 6º — El Tribunal Nacional de Defensa de la Competencia podrá previa solicitud de los interesados autorizar acuerdos o prácticas concertadas sólo cuando contribuyan a mejorar el interés económico general.

A los fines previstos en el párrafo anterior, el Tribunal Nacional de Defensa de la Competencia deberá considerar entre otras cuestiones, que no se consienta a las empresas partícipes la posibilidad de eliminar la competencia respecto de una parte sustancial del mercado in-

volucrado; que se produzca un aumento de la productividad; que se mejore la calidad de los bienes o servicios ofrecidos; que se propicie la eficiencia y el desarrollo tecnológico o económico y que no se elimine la competencia en el mercado regional de bienes o servicios.

En estos supuestos el tribunal deberá convocar a audiencia pública, cuyo procedimiento será reglado por el respectivo decreto reglamentario.

Art. 7º — La autorización concedida deberá determinar con precisión las condiciones a las que ha sido sometida y el plazo por el que se la concede, debiendo en tal caso fijar el tribunal la fecha a partir de la cual tendrá efecto.

En caso de verificar el tribunal que han cambiado las circunstancias que motivaron el otorgamiento de una autorización, podrá revocarla o modificar las condiciones fijadas inicialmente. Asimismo, la autorización podrá ser revocada si los beneficiarios incumplieran las condiciones establecidas o si el tribunal comprobara que fueron otorgadas en base a datos relevantes aportados en forma incompleta o inexacta.

CAPÍTULO IV

De las concentraciones y fusiones

Art. 8º — A los efectos de esta ley se entiende por concentración económica la toma de control de una o varias empresas, a través de la realización de los siguientes actos:

- a) La fusión entre empresas;
- b) La transferencia de fondos de comercio;
- c) La adquisición de la propiedad o cualquier derecho sobre acciones o participaciones de capital o títulos de deuda que den cualquier tipo de derecho a ser convertidos en acciones o participaciones de capital o a tener cualquier tipo de influencia en las decisiones de la persona que los emita cuanto tal adquisición otorgue al adquirente el control de, o la influencia sustancial sobre la misma;
- d) Cualquier otro acuerdo o acto que transfiera en forma fáctica o jurídica a una persona o grupo económico los activos de una empresa, o le otorgue influencia determinante en la adopción de decisiones de administración ordinaria o extraordinaria de una empresa.

Art. 9º — Se prohíben las concentraciones económicas cuyo objeto o efecto sea o pueda ser disminuir, restringir o distorsionar la competencia.

Art. 10. — Los actos indicados en el artículo 8º de esta ley, que impliquen la participación de empresas o grupos de empresas en una cuota igual o superior al veinticinco por ciento (25 %) o más del mercado relevante o de una parte sustancial del mismo o cuando cualquiera de los participantes tenga registrada una facturación bruta anual en el último balance equivalente a \$ 100.000.000, deberán ser notificados para su examen previamente o en un plazo de 15 (quince) días a partir de su realización ante el Tribunal Nacional de Defensa de la Competencia, bajo apercibimiento, en caso de incumplimiento, de lo previsto en el artículo 46, inciso d).

Art. 11. — Se encuentran exentas de la notificación obligatoria prevista en el artículo anterior las siguientes operaciones:

- a) Las adquisiciones de empresas de las cuales el comprador ya poseía más del 50 % de las acciones;
- b) Las adquisiciones de bonos, debentures, acciones sin derecho a voto o títulos de deuda de empresas;
- c) Las adquisiciones de una única empresa por parte de una única empresa extranjera que no posea previamente activos o acciones de otras empresas en la Argentina;
- d) Adquisiciones de empresas liquidadas (que no hayan registrado actividad en el país en el último año).

Art. 12. — El Tribunal Nacional de Defensa de la Competencia fijará con carácter general la información y antecedentes que las personas deberán proveer al tribunal y los plazos en que dicha información y antecedentes deben ser provistos.

Art. 13. — La reglamentación establecerá la forma y contenido adicional de la notificación de los proyectos de concentración económica y operaciones de control de empresas de modo que se garantice el carácter confidencial de las mismas.

Art. 14. — En todos los casos sometidos a la notificación prevista en este capítulo, el tribunal por resolución fundada, deberá decidir dentro de los sesenta (60) días de presentada la solicitud y documentación respectiva:

- a) Autorizar la operación;
- b) Subordinar el acto al cumplimiento de las condiciones que el mismo tribunal establezca;
- c) Denegar la autorización.

Art. 15. — Transcurrido el plazo previsto en el artículo anterior sin mediar resolución al respecto, la operación se tendrá por autorizada tácitamente. La autorización tácita producirá en todos los casos los mismos efectos legales que la autorización expresa.

Art. 16. — Las concentraciones que hayan sido notificadas y autorizadas no podrán ser impugnadas posteriormente en sede administrativa en base a información y documentación verificada por el tribunal, salvo cuando dicha resolución se hubiera obtenido en base a información falsa o incompleta proporcionada por el solicitante.

Art. 17. — Cuando la concentración económica involucre a empresas o personas cuya actividad económica esté reglada por el Estado nacional a través de un organismo de control o regulador, el Tribunal Nacional de Defensa de la Competencia, previo al dictado de su resolución, deberá requerir a dicho ente estatal un informe y opinión fundada sobre la propuesta de concentración económica en cuanto al impacto sobre la competencia en el mercado respectivo o sobre el cumpli-

miento del marco regulatorio respectivo. El ente estatal deberá pronunciarse en el término máximo de quince (15) días, transcurrido dicho plazo se entenderá que el mismo no objeta la operación.

CAPÍTULO V

Autoridad de aplicación

Art. 18. — Créase el Tribunal Nacional de Defensa de la Competencia como organismo autárquico en el ámbito del Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos de la Nación con el fin de aplicar y controlar el cumplimiento de esta ley. Tendrá su sede en la Ciudad de Buenos Aires pero podrá actuar, constituirse o sesionar en cualquier lugar de la República mediante delegaciones fijas o móviles.

Art. 19. — El Tribunal Nacional de Defensa de la Competencia estará integrado por siete (7) miembros ^{al} con suficientes antecedentes e idoneidad para ejercer ^{por} el cargo, de los cuales dos por lo menos serán abogados y otros dos profesionales en ciencias económicas, todos ellos con más de cinco (5) años en el ejercicio de la profesión. Los miembros del tribunal tendrán dedicación exclusiva durante su mandato, con excepción de la actividad docente.

Los integrantes del tribunal deberán excusarse por las causas previstas en los incisos 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9 y 10 del artículo 16 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación.

Art. 20. — Los miembros del tribunal serán designados por el Poder Ejecutivo nacional previo concurso público de antecedentes y oposición ante un jurado integrado por el procurador del Tesoro de la Nación, el secretario de Industria, Comercio y Minería del Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos de la Nación, los presidentes de las comisiones de Comercio de ambas Cámaras del Poder Legislativo de la Nación, el presidente de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal Económico y los presidentes de la Academia Nacional de Derecho y de la Academia Nacional de Ciencias Económicas.

Art. 21. — Los miembros del tribunal durarán en el ejercicio de sus funciones seis (6) años. La renovación de los mismos se hará por mitades cada tres años y podrán ser reelegidos. Sólo podrán ser removidos previa decisión —por mayoría simple— del jurado mencionado en el artículo anterior.

La causa por remoción se formará obligatoriamente si existe acusación del Poder Ejecutivo nacional o del presidente del Tribunal y sólo por decisión del jurado si la causa tuviera cualquier otro origen.

El jurado dictará normas de procedimiento que aseguren el derecho de defensa y el debido trámite de la causa.

Art. 22. — Son causas de remoción de los miembros del tribunal:

- a) Mal desempeño en sus funciones;
- b) Negligencia reiterada que dilate la substanciación de los procesos;

- c) Incapacidad sobreviniente;
- d) Condena por delito doloso;
- e) Violaciones de las normas sobre incompatibilidad;
- f) No excusarse en los presupuestos previstos por el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación.

Art. 23. — Será suspendido preventivamente y en forma inmediata en el ejercicio de sus funciones aquel integrante del tribunal sobre el que recaiga auto de procesamiento por delito doloso.

Art. 24. — Créase en el ámbito del Tribunal Nacional de Defensa de la Competencia el Registro Nacional de Defensa de la Competencia, en el que deberán inscribirse las operaciones de concentración económica previstas en el capítulo IV y las resoluciones definitivas dictadas por el tribunal. El Registro será público.

Art. 25. — Son funciones y facultades del Tribunal Nacional de Defensa de la Competencia:

- a) Realizar los estudios e investigaciones de mercado que considere pertinentes. Para ello podrá requerir a los particulares y autoridades nacionales, provinciales o municipales la información, documentación o colaboración que juzgue necesarios;
- b) Celebrar audiencias con los presuntos responsables, denunciantes, damnificados, testigos y peritos, recibirles declaración y ordenar careos, para lo cual podrá solicitar el auxilio de la fuerza pública;
- c) Realizar las pericias necesarias sobre libros, documentos y demás elementos conducentes a la investigación, controlar existencias, comprobar orígenes y costos de materias primas u otros bienes;
- d) Imponer las sanciones establecidas en la presente ley;
- e) Promover el estudio y la investigación en materia de competencia;
- f) Cuando lo considere pertinente emitir opinión en materia de competencia y libre concurrencia respecto de leyes, reglamentos, circulares y actos administrativos, sin que tales opiniones tengan efecto vinculante;
- g) Emitir recomendaciones de carácter general o sectorial respecto a las modalidades de la competencia en los mercados;
- h) Actuar con las dependencias competentes en la negociación de tratados, acuerdos o convenios internacionales en materia de regulación o políticas de competencia y libre concurrencia;
- i) Elaborar su reglamento interno;
- j) Organizar el Registro Nacional de la Competencia creado por esta ley;
- k) Promover e instar acciones ante la Justicia, para lo cual designará representante legal a tal efecto;

- l) Suspender los plazos procesales de la presente ley por resolución fundada;
- ll) Acceder a los lugares objeto de inspección con el consentimiento de los ocupantes o mediante orden judicial la que será solicitada por el tribunal ante el juez competente, quien deberá resolver en el plazo de 24 horas;
- m) Solicitar al juez competente las medidas cautelares que estime pertinentes, las que deberán ser resueltas en el plazo de 24 horas;
- n) Suscribir convenios con organismos provinciales o municipales para la habilitación de oficinas receptoras de denuncias en las provincias;
- ñ) Efectuar contrataciones de personal para la realización de trabajos específicos o extraordinarios que no puedan ser realizados por su planta permanente, fijando las condiciones de trabajo y su retribución;
- o) Propiciar soluciones consensuadas entre las partes;
- p) Al presidente del tribunal le compete ejercer la función administrativa del organismo.

CAPÍTULO VI

Del presupuesto

Art. 26. — El Tribunal Nacional de Defensa de la Competencia formulará anualmente el proyecto de presupuesto para su posterior elevación al Poder Ejecutivo nacional.

El tribunal establecerá la fijación de aranceles que deberán abonar los interesados por las actuaciones que inicien ante el mismo. Su producido será destinado a sufragar los gastos ordinarios del organismo.

CAPÍTULO VII

Del procedimiento

Art. 27. — El procedimiento se iniciará de oficio o por denuncia realizada por cualquier persona física o jurídica, pública o privada. Las personas directamente damnificadas por los actos prohibidos en esta ley, podrán actuar en el proceso en los términos autorizados por el artículo 82 y concordantes del Código Procesal Penal.

Art. 28. — Todos los plazos de esta ley se contarán por días hábiles administrativos.

Art. 29. — La denuncia deberá contener el detalle de los hechos que se imputan y su fundamentación. El tribunal podrá desestimar por resolución fundada la denuncia cuando de su sola exposición resultare que los hechos no encuadran en las previsiones de la presente ley.

Art. 30. — Si el tribunal estimare que la denuncia es pertinente correrá traslado por diez (10) días al presunto responsable para que dé las explicaciones que estime conducentes. En caso de que la instrucción se iniciare de oficio se correrá traslado de la relación de los hechos y la fundamentación que lo motivaron.

Art. 31. — Evacuada la vista el tribunal resolverá sobre la procedencia de la instrucción sumarial.

Art. 32. — Si el tribunal considera satisfactorias las explicaciones, o si concluida la instrucción no hubiere mérito suficiente para la prosecución del procedimiento, se dispondrá su archivo, y en su caso la absolución del denunciado.

Art. 33. — Concluida la instrucción el tribunal notificará a los presuntos infractores para que en un plazo de quince (15) días efectúen su descargo y ofrezcan la prueba que consideren pertinente.

Art. 34. — Las decisiones del tribunal en materia de prueba son irrecurribles.

Art. 35. — Concluido el período de prueba, que será de noventa (90) días, o transcurrido el plazo para realizarlo, las partes podrán alegar en el plazo de seis (6) días sobre el mérito de la misma. El tribunal dictará resolución en un plazo máximo de sesenta (60) días. La resolución del tribunal pone fin a la vía administrativa.

Art. 36. — El tribunal en cualquier estado del procedimiento podrá imponer el cumplimiento de condiciones que establezca u ordenar el cese o la abstención de la conducta lesiva. Cuando se pudiere causar una lesión irreparable al régimen de competencia podrá ordenar las medidas que según las circunstancias fueren más aptas para prevenir dicha lesión. Contra esta resolución podrá interponerse recurso de apelación con efecto devolutivo, en la forma y términos previstos en los artículos 52 y 53.

En igual sentido podrá disponer de oficio o a pedido de parte la suspensión, modificación o revocación de las medidas dispuestas en virtud de circunstancias sobrevinientes o que no pudieron ser conocidas al momento de su adopción.

Art. 37. — Hasta el dictado de la resolución del artículo 35 el presunto responsable podrá comprometerse al cese inmediato o gradual de los hechos investigados o la modificación de aspectos relacionados con ello.

El compromiso estará sujeto a la aprobación del Tribunal Nacional de Defensa de la Competencia a los efectos de producir la suspensión del procedimiento.

Transcurridos tres (3) años del cumplimiento del compromiso del presente artículo, se archivarán las actuaciones.

Art. 38. — El tribunal podrá de oficio o a instancia de parte aclarar conceptos oscuros o suplir cualquier omisión que contengan sus resoluciones.

Art. 39. — El Tribunal Nacional de Defensa de la Competencia decidirá la convocatoria a audiencias cuando lo considere oportuno para la marcha de las investigaciones.

Art. 40. — La decisión del Tribunal Nacional de Defensa de la Competencia respecto de la realización de la audiencia deberá contener, según corresponda:

- a) Identificación de la investigación en curso;
- b) Carácter de la audiencia;
- c) Objetivo;
- d) Fecha, hora y lugar de realización;
- e) Requisitos para la asistencia y participación.

Art. 41. — Las audiencias deberán ser convocadas con una antelación mínima de veinte (20) días y notificadas a las partes acreditadas en el expediente en un plazo no inferior a quince (15) días.

Art. 42. — La convocatoria a audiencia deberá ser publicada en el Boletín Oficial y en dos diarios de circulación nacional con una antelación mínima de diez (10) días. Dicha publicación deberá contener al menos, la información prevista en el artículo 40.

Art. 43. — El tribunal dará intervención como parte coadyuvante en los procedimientos que se sustancien ante el mismo, a los afectados de los hechos investigados, a las asociaciones de consumidores y asociaciones empresarias reconocidas legalmente, a las provincias y a toda otra persona que pueda tener un interés legítimo en los hechos investigados.

Art. 44. — El tribunal podrá requerir opinión fundada sobre los hechos investigados a personas físicas o jurídicas de carácter público o privado de reconocida versación.

Art. 45. — Las resoluciones que establecen sanciones del tribunal, una vez notificadas a los interesados y firmes, se publicarán en el Boletín Oficial y cuando aquél lo estime conveniente en los diarios de mayor circulación del país a costa del sancionado.

CAPÍTULO VIII

De las sanciones

Art. 46. — Las personas físicas o de existencia ideal que no cumplan con las disposiciones de esta ley, serán pasibles de las siguientes sanciones:

- a) El cese de los actos o conductas previstas en el capítulo I y II y, en su caso la remoción de sus efectos;
- b) Los que realicen los actos prohibidos en el capítulo I, II y en el artículo 14 del capítulo IV, serán sancionados con una multa de diez mil pesos (\$ 10.000) hasta ciento cincuenta millones de pesos (\$ 150.000.000), que se graduará en base a: 1) La pérdida incurrida por todas las personas afectadas por la actividad prohibida. 2) El beneficio obtenido por todas las personas involucradas en la actividad prohibida. 3) El valor de los activos involucrados de las personas indicadas en el punto 2 precedente al momento en que se cometió la violación. En caso de reincidencia, los montos de la multa se duplicarán;
- c) Sin perjuicio de otras sanciones que pudieren corresponder, cuando se verifiquen actos que constituyan abuso de posición dominante o cuando se constate que se ha adquirido o consolidado una posición monopólica u oligopólica en violación de las disposiciones de esta ley, el tribunal podrá imponer el cumplimiento de condiciones que apunten a neutralizar los aspectos distorsivos sobre la competencia o solicitar al

juez competente que las empresas infractoras sean disueltas, liquidadas, desconcentradas o divididas;

- d) Los que no cumplan con lo dispuesto en los artículos 10, 36 y 37 serán pasibles de una multa de hasta un millón de pesos (\$ 1.000.000) diarios, contados desde el vencimiento de la obligación de notificar los proyectos de concentración económica o desde el momento en que se incumple el compromiso o la orden de cese o abstención. Ello sin perjuicio de las demás sanciones que pudieren corresponder.

Art. 47. — Las personas de existencia ideal son imputables por las conductas realizadas por las personas físicas que hubiesen actuado en nombre, con la ayuda o en beneficio de la persona de existencia ideal, y aun cuando el acto que hubiese servido de fundamento a la representación sea ineficaz.

Art. 48. — Cuando las infracciones previstas en esta ley fueren cometidas por una persona de existencia ideal, la multa también se aplicará solidariamente a los directores, gerentes, administradores, síndicos o miembros del Consejo de Vigilancia, mandatarios o representantes legales de dicha persona de existencia ideal que por su acción o por la omisión de sus deberes de control, supervisión o vigilancia hubiesen contribuido, alentado o permitido la comisión de la infracción.

En tal caso, se podrá imponer sanción complementaria de inhabilitación para ejercer el comercio de uno (1) a diez (10) años a la persona de existencia ideal y a las personas enumeradas en el párrafo anterior.

Art. 49. — El tribunal en la imposición de multas deberá considerar la gravedad de la infracción, el daño causado, los indicios de intencionalidad, la participación del infractor en el mercado, el tamaño del mercado afectado, la duración de la práctica o concentración y la reincidencia o antecedentes del responsable, así como su capacidad económica.

Art. 50. — Los que obstruyan o dificulten la investigación o no cumplan los requerimientos del tribunal podrán ser sancionados con multas de hasta quinientos pesos (\$ 500) diarios. Cuando a juicio del tribunal se haya cometido la infracción mencionada, se dará vista de la imputación al presunto responsable, quien deberá efectuar los descargos y ofrecer pruebas en el plazo de cinco días.

Art. 51. — Las personas físicas o jurídicas damnificadas por los actos prohibidos por esta ley, podrán ejercer la acción de resarcimiento de daños y perjuicios conforme las normas del derecho común, ante el juez competente en esa materia.

CAPÍTULO IX

De las apelaciones

Art. 52. — Son apelables aquellas resoluciones dictadas por el tribunal que ordenen:

- a) La aplicación de las sanciones de multa;
- b) El cese o la abstención de una conducta;

- c) La oposición o condicionamiento respecto de los actos previstos en el capítulo IV;
- d) La desestimación de la denuncia por parte del Tribunal de Defensa de la Competencia;
- e) La resolución que dispone el sobreseimiento del denunciado.

Las apelaciones previstas en el inciso a) se otorgarán con efecto suspensivo, y la de los incisos b), c), d) y e) se concederán con efecto devolutivo.

Art. 53. — El recurso de apelación deberá interponerse y fundarse ante el Tribunal Nacional de Defensa de la Competencia dentro del plazo de quince (15) días de notificada la resolución. Dicho tribunal dentro de los cinco (5) días de interpuesto el recurso deberá elevar el expediente a la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal Económico de la Ciudad de Buenos Aires o a la Cámara Federal que corresponda en el interior del país.

CAPÍTULO X

De la prescripción

Art. 54. — Las acciones que nacen de las infracciones previstas en esta ley prescriben a los dos (2) años.

Art. 55. — Los plazos de prescripción se interrumpen con la denuncia o por la comisión de otro hecho sancionado por la presente ley.

CAPÍTULO XI

Disposiciones transitorias y complementarias

Art. 56. — Será de aplicación en los casos no previstos por esta ley y su reglamentación el Código Penal de la Nación, el Código Procesal Penal y el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación en cuanto sean compatibles con las disposiciones de esta ley.

Art. 57. — No serán aplicables a las cuestiones regidas por esta ley las disposiciones de la ley 19.549.

Art. 58. — Quedan exceptuados de la aplicación de la presente ley los medios de comunicación en lo que respecta a la irrestricta libertad de prensa e información, no así cuando se tratare de conductas o prácticas económicas que importen la obtención de ventajas que afecten la libre competencia.

Art. 59. — Derógase la ley 22.262. No obstante ello, las causas en trámite a la fecha de entrada en vigencia de la presente ley, continuarán tramitando de acuerdo a sus disposiciones.

Art. 60. — Queda derogada toda atribución de competencia relacionada con el objeto y finalidad de esta ley otorgada a otros organismos o entes estatales.

Art. 61. — El Poder Ejecutivo reglamentará la presente ley, en el término de ciento veinte (120) días, computados a partir de su publicación.

Art. 62. — Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de las comisiones, 2 de marzo de 1999.

Rodolfo F. Gabrielli. — José G. Dumón. — Juan C. Maqueda. — Oscar S. Lambertio. — Jorge O. Fo'loni. — Miguel A. Alterach. — Amalia Isequilla. — Sergio E. Acevedo. — Enrique G. Cardesa. — Lorenzo S. Domínguez. — Sara G. Liponesky de Amavet. — Ernesto A. Löffler. — Ana M. Mosso. — Félix M. Mothe. — Héctor R. Romero. — Martha C. Alarcía. — Manuel J. Baladrón. — Carlos A. Becerra. — Leticia Bianculli. — Carmen del Rosario Caillet. — Eduardo O. Camaño. — Fortunato R. Cambaereri. — Emilio E. Carrara. — Mirian Curretti de Wajsfeld. — María L. Chaya. — Mario Das Neves. — Roberto R. de Bariazarra. — Guillermo H. De Sanctis. — Esteban A. Dómina. — Pedro A. Dufou. — Carlos G. Haquim. — Marcelo E. López Arias. — Fernando R. Llamosas. — Fernando R. Montoya. — María del Carmen Mossello de Benzo. — Javier Mouraño. — Norberto R. Nicotra. — Marta I. Ortega. — María G. Pereyra de Montenegro. — Horacio F. Pernasetti. — Bernardo P. Quinzio. — Fernando O. Salim. — Carlos E. Soria. — Margarita R. Stolbizer. — Juan C. Veramendi. — Raúl H. Vicchi. — Carlos A. Vilche. — Alfredo H. Villalba.

En disidencia parcial:

César Arias. — Carlos M. Balter. — Diana B. Conti. — Mario N. Fadel. — Cristina Fernández de Kirchner. — Gustavo C. Galland. — Juan H. González Gaviola. — Manuel A. Martínez Zuccardi. — Alberto A. Natale. — Juan C. Pezoa. — Juan C. Suárez. — Marcelo E. Vensentini.

INFORME

Las comisiones de Comercio, de Legislación General, de Justicia y de Presupuesto y Hacienda, al considerar los proyectos de ley de los señores diputados Cambareri y otros y de los señores diputados Gabrielli y otros, y teniendo a la vista el expediente 466-D-98 del señor diputado Flores, el cual ha sido uno de los primeros diputados en presentar un proyecto modificando la Ley de Defensa de la Competencia, han creído conveniente unificarlos en un solo texto, prestándole su acuerdo favorable en virtud de la importancia del tema en cuestión.

Rodolfo O. Gabrielli.

FUNDAMENTOS DE LA DISIDENCIA PARCIAL DEL SEÑOR DIPUTADO CESAR ARIAS

Artículo 2º — Las siguientes conductas, entre otras, en la medida que configuren las hipótesis del artículo 1º, constituyen prácticas restrictivas de la competencia.

a) Fijar, concertar o manipular en forma directa o indirecta el precio de venta, o compra de bienes o servicios que se ofrezcan o demanden en el mercado, así como intercambiar información con el mismo objeto o efecto;

b) Establecer obligaciones de producir, procesar, distribuir, comprar o comercializar sólo una cantidad restringida o limitada de bienes, o prestar un número, volumen o frecuencia restringida o limitada de servicios;

c) Repartir en forma horizontal zonas, mercados clientes y fuentes de aprovisionamiento;

d) Concertar o coordinar posturas en las licitaciones o concursos;

e) Concertar la limitación o control del desarrollo técnico o las inversiones destinadas a la producción o comercialización de bienes y servicios;

f) Concertar, impedir, dificultar u obstaculizar a terceras personas la entrada o permanencia en un mercado o excluirlas de éste;

g) Fijar, imponer o practicar, directa o indirectamente, en acuerdo con competidores o individualmente, en cualquier forma precios y condiciones de compra o venta de bienes, de prestaciones de servicios o de producción;

h) Regular mercados de bienes o servicios mediante acuerdos para limitar o controlar la investigación y el desarrollo tecnológico, la producción de bienes o prestación de servicios, o para dificultar inversiones destinadas a la producción de bienes o servicios, o de su distribución;

i) Subordinar la venta de un bien a la adquisición de otro, o a la utilización de un servicio, o subordinar la prestación de un servicio a la utilización de otro o a la adquisición de un bien;

j) Sujetar la compra o venta a la condición de no usar o adquirir, vender o abastecer bienes o servicios producidos, procesados, distribuidos o comercializados por un tercero, salvo cuando se trate de contratos de exclusividad;

k) Imponer condiciones discriminatorias para la adquisición o enajenación de bienes o servicios sin razones fundadas en los usos y costumbres comerciales;

l) Suprimido.

l) Limitar o impedir el acceso de nuevas empresas al mercado;

II) Enajenar bienes o prestar servicios a precios inferiores a su costo con la finalidad de desplazar a la competencia en el mercado o que produzca daños en la imagen o en el patrimonio o en el valor de las marcas de sus proveedores de bienes o de servicios.

Art. 4º — A los efectos de esta ley se entiende que una o más personas gozan de posición dominante cuando

para un determinado tipo de producto o servicio es la única oferente o demandante dentro del mercado nacional o regional, o cuando sin ser la única no esté expuesta a una competencia sustancial.

La conquista del mercado fundada en la mayor eficiencia de un agente económico en relación a sus competidores no constituye abuso de posición dominante.

Se presume la posición dominante cuando una o varias personas vinculadas entre sí controlan como mínimo el veinticinco por ciento (25 %) del mercado respecto de determinado bien o servicio.

Art. 5º — Se considerará abuso de posición dominante, entre otras:

a) La posición dominante que impida que el bien o servicio ofrecido o demandado sea sustituible por otro, sean ellos de origen nacional o extranjero;

b) La posición dominante que limite, restrinja, falsee, o distorsione la competencia;

c) El ejercicio de una posición dominante que influya unilateralmente en la formación de precios o contraiga artificialmente el abastecimiento o demanda del bien o servicio en el mercado.

Art. 6º — El Tribunal Nacional de Defensa de la Competencia podrá a solicitud de partes autorizar acuerdos o prácticas concertadas, sólo cuando contribuyan a mejorar el interés económico general, no perjudique los intereses de los consumidores o usuarios del bien o servicios de que se trate, y no ocasione la eliminación de la competencia.

En estos supuestos el tribunal deberá convocar a audiencia pública, cuyo procedimiento será reglado por el respectivo decreto reglamentario.

Art. 7º — La autorización concedida deberá determinar con precisión las condiciones a las que ha sido sometida y el plazo por el que se la concede, debiendo en tal caso fijar el tribunal la fecha a partir del cual tendrá efecto, y ordenar la publicidad de la resolución en el Boletín Oficial.

En caso de verificar el tribunal que han cambiado las circunstancias que motivaron el otorgamiento de una autorización, podrá proceder a renegociar con los interesados las condiciones fijadas inicialmente, cuidando de no causarles un perjuicio económico irreparable.

Asimismo, la autorización podrá ser revocada si los beneficiarios incumplieran las condiciones establecidas o si el tribunal comprobara que fueron otorgadas en base a datos relevantes aportados en forma incompleta o inexacta.

Art. 15. — Suprimir.

Art. 58. — Suprimir.

Comparto el texto normativo propuesto en el dictamen de comisión con las disidencias que seguidamente expongo:

En el artículo 2º del Dictamen de Defensa de la Competencia he procedido a modificar el inciso j) agregando la frase: "salvo cuando se trate de contratos de

exclusividad", por cuanto es de práctica habitual y lícita que los mismos condicionen la venta de un determinado bien o servicio a la no adquisición o abastecimiento de bienes o servicios producidos, distribuidos o comercializados por terceros.

Por similares razones suprimo el inciso 1) del artículo 2º, ya que en el ámbito mercantil, el rechazo de venta de bienes o de prestación de servicios implica en cuanto no signifique discriminación, ejercicio de la libertad contractual.

En el primer párrafo del artículo 4º defino la posición dominante, señalando "la mayor eficiencia" como monopolio natural lícito, hasta tanto surjan empresas que respecto del bien o servicio de que se trate obtengan una competitividad significativa en el mercado.

Es de gran utilidad establecer la presunción legal que fije el límite inferior a partir del cual se considerará la existencia de una posición dominante; límite que fijo en un veinticinco por ciento (25 %) del control del mercado de bienes y servicios.

He sustituido el artículo 5º por otro, en el cual enumero supuestos de posiciones dominantes abusivas, teniendo en cuenta las circunstancias consideradas en el artículo 5º del dictamen, dejando abierta la posibilidad de encuadrar nuevas situaciones surgidas de la dinámica propia de las fuerzas del mercado.

Comparto la oportunidad, mérito y conveniencia de facultar al Tribunal Nacional de Defensa de la Competencia a autorizar, excepcionalmente, acuerdos o prácticas concertadas cuando ello beneficie al interés económico general. Pero también creo necesario que la decisión administrativa elabore su decisorio, teniendo especial cuidado de que el mismo no perjudique los intereses de los consumidores o usuarios del bien o servicio y no se ocasione con ello la eliminación de la competencia.

La transparencia del mercado coadyuva a su mejor funcionamiento en miras del interés económico general, por lo que la publicidad de las resoluciones que autorizan prácticas concertadas, a mi entender colaboraría a informar a la comunidad económica las nuevas reglas de juego respecto de la demanda u oferta del bien o servicio al que se refieren dichos acuerdos.

Reconociendo las fluctuaciones propias del mercado de bienes y servicios considero importante reconocer al tribunal la facultad de renegociar las condiciones pactadas en la autorización inicial, adoptando las pautas del acuerdo resultante a las nuevas circunstancias de la realidad económica, pero valorando cuidadosamente el impacto injustificado que pudieren tener dichas modificaciones en la situación patrimonial de los interesados.

He suprimido la autorización tácita de acuerdos o prácticas concertadas por considerar que las decisiones de los órganos administrativos no pueden sustentarse solamente en el acto de voluntad ya que por esa vía podrían pasar a ser discrecionales o arbitrarias y requieren el desarrollo conceptual de las razones que sustentan el decisorio para poder evaluar su razonabilidad o no. Sobre todo teniendo en cuenta que en la redac-

ción original se impide la impugnación de las autorizaciones concedidas, con la única excepción de las otorgadas en base a información falsa o incompleta.

La presente ley tiene por finalidad proteger el libre juego de las fuerzas del mercado sin interferencia con el ejercicio de la libertad de expresión, que tiene debida protección constitucional. Por tanto no requiere aclaración sobre su aplicabilidad a la empresa comercial que trafica con la prensa, sin que pueda afectar tales principios garantizados por nuestra Ley Fundamental. Por ello creo conveniente suprimir el artículo 58 del dictamen.

César Arias.

ANTECEDENTES

1

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados, ...

LEY NACIONAL DE DEFENSA DE LA

COMPETENCIA

CAPÍTULO I

De los acuerdos y prácticas prohibidas

Artículo 1º — Están prohibidos y serán sancionados de conformidad con las normas de la presente ley, los actos o conductas relacionados con la producción e intercambio de bienes o servicios, que limiten, restrinjan o distorsionen la competencia o que constituyan abuso de una posición dominante en un mercado, de modo que pueda resultar perjuicio para el interés económico general.

Queda comprendida en este artículo, en tanto se den los supuestos del párrafo anterior, la obtención de ventajas competitivas significativas mediante la infracción de otras normas.

Art. 2º — Quedan sometidas a las disposiciones de esta ley todas las personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, con o sin fines de lucro que realicen actividades económicas en todo o en parte del territorio nacional, y las que con domicilio legal en el extranjero realicen actividades económicas fuera del país, en la medida en que sus actos, actividades o acuerdos puedan producir efectos en el mercado nacional.

A los efectos de esta ley, para determinar la verdadera naturaleza de los actos o conductas y acuerdos, atenderá a las situaciones y relaciones económicas que efectivamente se realicen, persigan o establezcan.

Art. 3º — Quedan prohibidas en particular las prácticas anticompetitivas en sí mismas, consistentes en acuerdos, convenios, decisiones de asociaciones o prácticas concertadas, en todos los casos entre competidores, cuyo objeto o efecto sea:

- a) La fijación, concertación o manipulación en forma directa o indirecta del precio de venta, o compra de bienes o servicios al que son ofre-

cidos o demandados en el mercado, así como el intercambio de información con el mismo objeto o efecto;

- b) Establecer obligaciones de producir, procesar, distribuir, comparar o comercializar sólo una cantidad restringida o limitada de bienes, o la prestación de un número, volumen o frecuencia restringida o limitado de servicios;
- c) El reparto horizontal de zonas, mercados, clientes y fuentes de aprovisionamiento, excepto en los casos en los cuales tales conductas se originen en operaciones derivadas de franquicias, licencias o distribución, cuyas prácticas no persiguen objetivos anticompetitivos;
- d) La concertación o coordinación de posturas en las licitaciones o concursos;
- e) Concertar la limitación o control del desarrollo técnico o las inversiones destinadas a la producción o comercialización de bienes y servicios;
- f) Concertar, impedir, dificultar u obstaculizar a terceras personas la entrada o permanencia en un mercado o excluirlas de éste.

Las prácticas prohibidas establecidas en el presente artículo son nulas de nulidad absoluta.

CAPÍTULO II

Del abuso de posición dominante

Art. 4º — A los efectos de esta ley se entiende que una o más personas goza de posición dominante cuando para un determinado tipo de producto o servicio es la única oferente o demandante dentro del mercado nacional o en una o varias partes del mismo o, cuando sin ser la única no está expuesta a una competencia sustancial o, cuando por el grado de integración vertical u horizontal está en condiciones de determinar la viabilidad económica de un competidor o participante en el mercado, en perjuicio de éstos.

Art. 5º — A fin de establecer la existencia de posición dominante en un mercado, deberán considerarse las siguientes circunstancias:

- a) El grado en que el bien o servicio de que se trate, es sustituible por otros, ya sea de origen nacional como extranjero; las condiciones de tal sustitución y el tiempo requerido para la misma;
- b) El grado en que las restricciones normativas limiten el acceso de productos u oferentes o demandantes al mercado de que se trate;
- c) El grado en que el presunto responsable pueda influir unilateralmente en la formación de precios o restringir al abastecimiento o demanda en el mercado y el grado en que sus competidores puedan contrarrestar dicho poder.

CAPÍTULO III

De las autorizaciones

Art. 6º — El Tribunal Nacional de Defensa de la Competencia podrá autorizar acuerdos o prácticas concer-

tadas, sólo cuando contribuyan a mejorar el interés económico general y siempre que se traduzca en evidentes ventajas para los usuarios y consumidores, y no se consienta a las empresas partícipes la posibilidad de eliminar la competencia respecto de una parte sustancial del mercado involucrado.

En estos supuestos el tribunal deberá convocar a audiencia pública, cuyo procedimiento será reglado por el respectivo decreto reglamentario.

Art. 7º — La autorización concedida deberá determinar con precisión las condiciones a las que ha sido sometida y el plazo por el que se la concede, debiendo en tal caso fijar el tribunal la fecha a partir de la cual tendrá efecto.

En caso de verificar el tribunal que han cambiado las circunstancias que motivaron el otorgamiento de una autorización, podrá revocarla o modificar las condiciones fijadas inicialmente. Asimismo, la autorización podrá ser revocada si los beneficiarios incumplieran las condiciones establecidas o si el tribunal comprobaba que fueron otorgadas en base a datos relevantes aportados en forma incompleta o inexacta.

CAPÍTULO IV

De las concentraciones y fusiones

Art. 8º — Están prohibidas las operaciones de concentración económica que tengan como consecuencia la adquisición o consolidación de una posición dominante en un mercado, de modo que pueda resultar perjuicio para el interés económico general.

A los efectos de esta ley se entiende por concentración económica la toma de control de una o varias empresas a través de la realización de los siguientes actos:

- a) La fusión entre empresas;
- b) La transferencia del fondo de comercio;
- c) La adquisición de la propiedad o cualquier derecho sobre acciones o participaciones de capital o títulos de deuda que den cualquier tipo de derechos a ser convertidos en acciones o participaciones de capital o a tener cualquier tipo de influencia en las decisiones de la persona que los emita cuando tal adquisición otorgue al adquirente el control de, o la influencia sustancial sobre la misma;
- d) La celebración de contratos de colaboración empresarial o constitución de cualquier tipo de sociedad temporaria de empresas;
- e) Cualquier otro acuerdo o acto que transfiera en forma fáctica o jurídica a una persona o grupo económico los activos de una empresa o le otorgue influencia determinante en la adopción de decisiones de administración ordinaria o extraordinaria de una empresa.

Art. 9º — Los actos indicados en el artículo anterior que cumplan con las pautas que periódicamente fije el Poder Ejecutivo a través del decreto reglamentario de la presente ley, deberán ser notificados al Tribunal Nacional de Defensa de la Competencia con por lo

menos cuarenta y cinco días de anticipación a su realización. El tribunal dará a publicidad por un día estos actos a través del Boletín Oficial y en un diario de amplia circulación nacional. El tribunal podrá, dentro de los treinta (30) días de recibida la comunicación, decidir que el acto quede sujeto a autorización previa.

Art. 10. — El Tribunal Nacional de Defensa de la Competencia fijará con carácter general la información y antecedentes que las personas deberán proveer al tribunal y los plazos en que dicha información y antecedentes deben ser provistos.

Art. 11. — La reglamentación establecerá la forma y contenido adicional de la notificación de los proyectos de concentración económica y operaciones de control de empresas de modo que se garantice el carácter confidencial de las mismas.

Art. 12. — En todos los casos previstos en este capítulo el Tribunal Nacional de Defensa de la Competencia podrá, de considerarlo conveniente, llamar a audiencia pública. A tal fin el tribunal pondrá a disposición de quienes deseen participar en dichas audiencias los antecedentes del acto sometido a autorización, excepto la documentación que haya sido acompañada por las partes con la indicación de confidencial, en cuyo caso el tribunal por decisión fundada, resolverá al respecto.

Art. 13. — En todos los casos sometidos a autorización, el tribunal deberá decidir dentro de los ciento ochenta (180) días de presentada la solicitud y por resolución fundada, bajo apercibimiento en caso de incumplimiento, de lo previsto en el artículo 40 de la presente ley:

- a) Autorizar la operación;
- b) Subordinar el acto al cumplimiento de las condiciones que el mismo tribunal establezca;
- c) Denegar la autorización.

Art. 14. — Transcurrido el plazo previsto en el artículo anterior sin mediar resolución al respecto, la operación se tendrá por autorizada tácitamente. La autorización tácita producirá en todos los casos los mismos efectos legales que la autorización expresa.

Art. 15. — Cuando la concentración económica involucre a empresas o personas cuya actividad económica esté reglada por el Estado nacional a través de un organismo de control o regulador, el Tribunal Nacional de Defensa de la Competencia, previo al dictado de su resolución, deberá requerir a dicho ente estatal un informe y opinión fundada sobre la propuesta de concentración económica en cuanto al impacto sobre la competencia en el mercado respectivo. La opinión del ente de contralor o regulador no será vinculante para el tribunal, aunque deberá ser debidamente valorada en los fundamentos de su resolución.

CAPÍTULO V

Autoridad de aplicación

Art. 16. — Créase como órgano autónomo en el ámbito de la Secretaría de Industria, Comercio y Minería del Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públi-

cos de la Nación el Tribunal Nacional de Defensa de la Competencia, con el fin de aplicar y controlar el cumplimiento de esta ley. Tendrá su sede en la Capital Federal pero podrá actuar, constituirse o sesionar en cualquier lugar de la República mediante delegaciones fijas o móviles.

Art. 17. — El Tribunal Nacional de Defensa de la Competencia estará integrado por siete (7) miembros, tres (3) de los cuales serán abogados y otros tres (3) profesionales en ciencias económicas, el séptimo miembro podrá ser profesional en cualquiera de dichas ciencias. Todos con más de cinco (5) años en el ejercicio de la profesión.

Art. 18. — Los miembros del tribunal serán designados por el Poder Ejecutivo nacional previo concurso público de antecedentes y oposición ante un jurado integrado por el procurador del Tesoro de la Nación, el secretario de Industria, Comercio y Minería, el secretario de Obras y Servicios Públicos, ambos del Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos de la Nación y los presidentes de las comisiones de Comercio de ambas Cámaras del Poder Legislativo de la Nación.

Art. 19. — Los miembros del tribunal durarán en el ejercicio de sus funciones seis (6) años. La renovación de los mismos se hará por mitades cada tres años y podrán ser reelegidos. Sólo podrán ser removidos previa decisión de un jurado integrado por los funcionarios mencionados en el artículo anterior.

La causa por remoción se formará obligatoriamente si existe acusación del Poder Ejecutivo nacional o del presidente del tribunal y sólo por decisión del jurado si la causa tuviera cualquier otro origen.

El jurado dictará normas de procedimiento que aseguren el derecho de defensa y debido trámite de la causa.

Art. 20. — Son causas de remoción de los miembros del tribunal:

- a) Mal desempeño en sus funciones;
- b) Negligencia reiterada que dilate la sustanciación de los procesos;
- c) Incapacidad sobreviniente;
- d) Condena por delito doloso;
- e) Violaciones de las normas sobre incompatibilidad;
- f) No excusarse en los presupuestos previstos por el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación.

Art. 21. — Será suspendido preventivamente y en forma inmediata en el ejercicio de sus funciones aquel integrante del tribunal sobre el que recaiga auto de procesamiento por delito doloso.

Art. 22. — Créase en el ámbito del Tribunal Nacional de Defensa de la Competencia el Registro Nacional de Defensa de la Competencia, en el que deberán inscribirse las operaciones de concentración económica previstas en el capítulo IV y las resoluciones definitivas por el tribunal. El registro será público a los fines de estas últimas.

Art. 23. — Son funciones y facultades del Tribunal Nacional de Defensa de la Competencia:

- a) Realizar los estudios e investigaciones de mercado que considere pertinentes para detectar posibles distorsiones en la competencia. Para ello podrá requerir a los particulares y autoridades nacionales, provinciales o municipales la información, documentación o colaboración que juzgue necesarias;
- b) Celebrar audiencias con los presuntos responsables, denunciados, damnificados, testigos y peritos, recibirles declaración y ordenar careos, para lo cual podrá solicitar el auxilio de la fuerza pública;
- c) Realizar las pericias necesarias sobre libros, documentos y demás elementos conducentes a la investigación, controlar existencias, comprobar orígenes y costos de materias primas u otros bienes;
- d) Solicitar al juez en lo penal económico de la Capital Federal o al juez federal competente en el interior en cualquier estado del proceso como medida preventiva que, las personas físicas imputadas ya sea directa o por su participación o cooperación en los casos de personas de existencia ideal no puedan ausentarse del país sin previa autorización. El juez deberá resolver el pedido del tribunal en el plazo de veinticuatro (24) horas;
- e) Resolver las cuestiones sometidas a su competencia;
- f) Imponer las sanciones establecidas en la presente ley;
- g) Promover el estudio y la investigación en materia de competencia;
- h) Cuando lo considere pertinente, emitir opinión en materia de competencia y libre concurrencia respecto de leyes, reglamentos, circulares y actos administrativos, sin que tales opiniones tengan efectos vinculantes;
- i) Emitir recomendaciones de carácter general o sectorial respecto a las modalidades de la competencia en los mercados;
- j) Actuar con las dependencias competentes en la negociación de tratados, acuerdos o convenios internacionales en materia de regulación o políticas de competencia y libre concurrencia;
- k) Elaborar su reglamento interno;
- l) Elaborar su presupuesto anual;
- ll) Organizar el Registro Nacional de la Competencia creado por esta ley;
- m) Promover e instar acciones ante la Justicia, para lo cual designará representante legal a tal efecto;
- n) Suspender los plazos procesales de la presente ley por resolución fundada;
- ñ) Acceder a los lugares objeto de inspección con el consentimiento de los ocupantes o mediante

orden judicial la que será solicitada por el tribunal al juez competente, quien deberá resolver en el plazo de 24 horas;

- o) Solicitar al juez competente las medidas cautelares que estime pertinentes, las que deberán ser resueltas en el plazo de 24 horas;
- p) Suscribir convenios con organismos provinciales o municipales para la habilitación de oficinas receptoras de denuncias en las provincias;
- q) Efectuar contrataciones de personal para la realización de trabajos específicos o extraordinarios que no puedan ser realizados por su planta permanente, fijando las condiciones de trabajo y su retribución.

CAPÍTULO VI

Del presupuesto

Art. 24. — El Tribunal Nacional de Defensa de la Competencia formulará anualmente el proyecto de presupuesto para su posterior evaluación al Poder Ejecutivo nacional.

El tribunal establecerá la fijación de tasas que deberán abonar los interesados por las actuaciones que inicien ante el mismo. Su producido será destinado a sufragar los gastos ordinarios del organismo.

CAPÍTULO VII

Del procedimiento

Art. 25. — El procedimiento se iniciará de oficio o por denuncia realizada por cualquier persona física o jurídica, pública o privada.

Art. 26. — La denuncia deberá contener el detalle de los hechos que se imputan y su fundamentación. El tribunal podrá desestimar por resolución fundada la denuncia cuando de su sola exposición resultare que los hechos no encuadran en las previsiones de la presente ley.

Art. 27. — Si el tribunal estimare que la denuncia es pertinente correrá traslado por diez (10) días al presunto responsable para que dé las explicaciones que estime conducentes. En caso de que la instrucción se iniciare de oficio se correrá traslado de la relación de los hechos y la fundamentación que lo motivaron.

Art. 28. — Evacuada la vista el tribunal resolverá sobre la procedencia de la instrucción sumarial.

Art. 29. — Si el tribunal considera satisfactorias las explicaciones, o si concluida la instrucción no hubiere méritos suficientes para la prosecución del procedimiento, se dispondrá su archivo.

Art. 30. — Concluida la instrucción el tribunal notificará a los presuntos infractores para que en un plazo de quince (15) días efectúen su descargo y ofrezcan la prueba que consideren pertinente.

Art. 31. — Las decisiones del tribunal en materia de prueba son irrecurribles.

Art. 32. — Concluido el período de prueba, que será de noventa (90) días, o transcurrido el plazo para reali-

zarlo, las partes podrán alegar en el plazo de tres (3) días sobre el mérito de la misma. El tribunal dictará resolución en un plazo máximo de sesenta (60) días. La resolución del tribunal pone fin a la vía administrativa.

Art. 33. — El tribunal en cualquier Estado del procedimiento podrá imponer el cumplimiento de condiciones que establezca u ordenar el cese o la abstención de la conducta lesiva. Cuando se pudiese causar una lesión irreparable al régimen de competencia podrá ordenar las medidas que según las circunstancias fueren más aptas para prevenir dicha lesión. Contra esta resolución podrá interponerse recurso de apelación con efecto devolutivo, en la forma y términos previstos en los artículos 46 y 47.

En igual sentido podrá disponer de oficio o a pedido de parte la suspensión, modificación o revocación de las medidas dispuestas en virtud de circunstancias sobrevinientes o que no pudieron ser conocidas al momento de su adopción.

Art. 34. — Hasta el dictado de la resolución del artículo 32 el presunto responsable podrá comprometerse al cese inmediato o gradual de los hechos investigados o la modificación de aspectos relacionados con ello.

El compromiso estará sujeto a la aprobación del Tribunal Nacional de Defensa de la Competencia a los efectos de producir la suspensión del procedimiento.

Transcurridos tres (3) años de cumplimiento del compromiso del presente artículo, se archivarán las actuaciones.

Art. 35. — El tribunal podrá de oficio o a instancia de parte aclarar conceptos oscuros o suplir cualquier omisión que contengan sus resoluciones.

Art. 36. — El Tribunal Nacional de Defensa de la Competencia decidirá la convocatoria a audiencias cuando lo considere oportuno para la marcha de las investigaciones.

Art. 37. — La decisión del Tribunal Nacional de Defensa de la Competencia respecto de la realización de la audiencia deberá contener, según corresponda:

- a) Identificación de la investigación en curso;
- b) Carácter de la audiencia;
- c) Objetivo;
- d) Fecha, hora y lugar de realización;
- e) Requisitos para la asistencia y participación.

Art. 38. — Las audiencias deberán ser convocadas con una antelación mínima de veinte (20) días y notificadas a las partes acreditadas en el expediente en un plazo no inferior a quince (15) días.

Art. 39. — La convocatoria a audiencia pública deberá ser publicada en el Boletín Oficial con una antelación mínima de diez (10) días. Dicha publicación deberá contener al menos, la información prevista en el artículo 37.

Art. 40. — El tribunal podrá admitir como partes coadyuvantes en los procedimientos que se sustenten ante el mismo a los afectados de los hechos investigados, a las asociaciones de consumidores y asociaciones empresarias reconocidas legalmente, a las provincias y a toda

otra persona que pueda tener un interés legítimo en los hechos investigados. La decisión del tribunal será irrevocable.

Art. 41. — El tribunal podrá requerir dictámenes sobre los hechos investigados a personas físicas o jurídicas de carácter público o privado de reconocida versación.

Art. 42. — Las resoluciones que establecen sanciones del tribunal, una vez notificadas a los interesados y firmes, se publicarán en el Boletín Oficial y cuando aquél lo estime necesario en los diarios de mayor circulación del país a costa del sancionado.

CAPÍTULO VIII

De las sanciones

Art. 43. — Las personas físicas o de existencia ideal que no cumplan con las disposiciones de esta ley, serán pasibles de las siguientes sanciones:

- a) El cese de los actos o conductas previstos en los capítulos I y II y, en su caso la remoción de sus efectos;
- b) Los que realicen los actos prohibidos en los capítulos I, II y IV serán sancionados con una multa de mil pesos (\$ 1.000) hasta ciento cincuenta millones de pesos (\$ 150.000.000), que se graduará en base al beneficio obtenido por todas las personas involucradas en la actividad prohibida, o al valor de los activos involucrados de todas dichas personas al momento en que se cometió la violación o de los ingresos brutos de todas aquéllas. En caso de reincidencia, los montos de la multa se duplicarán;
- c) Sin perjuicio de otras sanciones que pudieren corresponder, cuando se verifiquen actos que constituyan abuso de posición dominante o cuando se constate que se ha adquirido o consolidado una posición monopólica u oligopólica en violación de las disposiciones de esta ley, el tribunal podrá imponer el cumplimiento de condiciones que apunten a neutralizar los aspectos distorsivos sobre la competencia o solicitar al juez competente que las empresas infractoras sean disueltas, liquidadas, desconcentradas o divididas;
- d) Los que no cumplan con lo dispuesto en los artículos 9º, 33 y 34 serán pasibles de una multa de hasta cinco mil pesos (\$ 5.000) diarios contados desde el vencimiento de la obligación de notificar los proyectos de concentración económica o desde el momento en que se incumple el compromiso o la orden de cese o abstención. Ello sin perjuicio de las demás sanciones que pudiera corresponder.

Art. 44. — Las personas de existencia ideal son imputables por las conductas realizadas por las personas físicas que hubiesen actuado en nombre, con la ayuda o en beneficio de la persona de existencia ideal, y aun cuando el acto que hubiese servido de fundamento a la representación sea ineficaz.

Art. 45. — Cuando las infracciones previstas en esta ley fueran cometidas por una persona de existencia ideal, la multa también se aplicará solidariamente a los directores, gerentes, administradores, síndicos o miembros del consejo de vigilancia, mandatarios o representantes legales de dicha persona de existencia ideal que por su acción o por la omisión de sus deberes de control, supervisión o vigilancia hubiesen contribuido, alentado o permitido la comisión de la infracción.

En tal caso, se podrá imponer sanción complementaria de inhabilitación para ejercer el comercio de uno (1) a diez (10) años a la persona de existencia ideal y a las personas enumeradas en el apartado anterior.

Art. 46. — El tribunal en la imposición de multas deberá considerar la gravedad de la infracción, el daño causado, los indicios de intencionalidad, la participación del infractor en el mercado, el tamaño del mercado afectado, la duración de la práctica o concentración y la reincidencia o antecedentes del responsable, así como su capacidad económica.

Art. 47. — Los que obstruyan o dificulten la investigación o no cumplan los requerimientos del tribunal podrán ser sancionados con multas de hasta quinientos pesos (\$ 500) diarios. Cuando a juicio del tribunal se haya cometido la infracción mencionada, se dará vista de la imputación al presunto responsable, quien deberá efectuar los descargos y ofrecer pruebas en el plazo de cinco días.

Art. 48. — Las personas físicas o jurídicas damnificadas por los actos prohibidos por esta ley, podrán ejercer la acción de resarcimiento de daños y perjuicios conforme las normas del derecho común, ante el juez competente en esa materia.

CAPÍTULO IX

De las apelaciones

Art. 49. — Son apelables aquellas resoluciones dictadas por el tribunal que ordenen:

- La aplicación de las sanciones de multa;
- El cese o la abstención de una conducta;
- La oposición o condicionamiento respecto a los actos previstos en el capítulo IV;
- La desestimación de la denuncia por parte del Tribunal de Defensa de la Competencia;
- La resolución que dispone el sobreseimiento del denunciado.

Las apelaciones previstas en el inciso a) se otorgarán con efecto suspensivo, y las de los incisos b), c), d) y e) se concederán con efecto devolutivo.

Art. 50. — El recurso de apelación deberá deducirse ante el Tribunal Nacional de Defensa de la Competencia dentro de los cinco (5) días de notificada la resolución, quien deberá elevar el expediente a la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal Económico en la Capital Federal o a la Cámara Federal que corresponda en el interior del país, en igual término.

CAPÍTULO X

De la prescripción

Art. 51. — Las acciones que nacen de las infracciones previstas en esta ley prescriben a los cinco (5) años.

Art. 52. — Los plazos de prescripción se interrumpirán con la denuncia o por la comisión de otro hecho sancionado por la presente ley.

CAPÍTULO XI

Disposiciones transitorias y complementarias

Art. 53. — Será de aplicación en los casos no previstos por esta ley y su reglamentación el Código Penal de la Nación, el Código Procesal Penal y el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación en cuanto sean compatibles con las disposiciones de esta ley.

Art. 54. — No serán aplicables a las cuestiones regidas por esta ley las disposiciones de la ley 19.549.

Art. 55. — Quedan exceptuados de la aplicación de la presente ley los medios de comunicación en lo que respecta a la irrestricta libertad de prensa e información, no así cuando se tratare de conductas o prácticas económicas que importen la obtención de ventajas que afecten la libre competencia.

Art. 56. — Derógase la ley 22.262. No obstante ello, las causas en trámite a la fecha de entrada en vigencia de la presente ley, continuarán tramitando de acuerdo a sus disposiciones.

Art. 57. — Queda derogada toda atribución de competencia relacionada con el objeto y finalidad de esta ley otorgada a otros organismos o entes estatales.

Art. 58. — El Poder Ejecutivo reglamentará la presente ley, en el término de ciento veinte (120) días, computados a partir de su publicación.

Art. 59. — Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Fortunato R. Cambareri. — Jorge E. Aubia.

— Félix A. Mothe. — Jorge A. Ocampos.

— Rafael M. Pascual.

2

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados, ...

LEY ANTIMONOPOLIO

CAPÍTULO I

De los acuerdos y prácticas prohibidos

Artículo 1º — Están prohibidos y serán sancionados de conformidad con las normas de la presente ley, los actos o conductas relacionados con la producción e intercambio de bienes o servicios, que limiten, restrinjan o distorsionen la competencia o que constituyan abuso de una posición dominante en un mercado, de modo que pueda resultar perjuicio para el interés económico general.

Queda comprendida en este artículo, en tanto se den los supuestos del párrafo anterior, la obtención de ventajas competitivas significativas mediante la infracción de otras normas.

Art. 2º — Quedan prohibidas en particular las prácticas anticompetitivas en sí mismas, consistentes en acuerdos, convenios, decisiones de asociaciones o prácticas concertadas, en todos los casos entre competidores, cuyo objeto o efecto sea:

- a) La fijación, concertación o manipulación en forma directa o indirecta del precio de venta, o compra de bienes o servicios al que son ofrecidos o demandados en el mercado, así como el intercambio de información con el mismo objeto o efecto;
- b) Establecer obligaciones de producir, procesar, distribuir, comparar o comercializar sólo una cantidad restringida o limitada de bienes, o la prestación de un número, volumen o frecuencia restringido o limitado de servicios;
- c) El reparto horizontal de zonas, mercados, clientes y fuentes de aprovisionamiento;
- d) La concertación o coordinación de posturas en las licitaciones o concursos;
- e) Concertar la limitación o control del desarrollo técnico o las inversiones destinadas a la producción o comercialización de bienes y servicios;
- f) Concertar, impedir, dificultar u obstaculizar a terceras personas la entrada o permanencia en un mercado o excluirlas de éste.

Las prácticas prohibidas en el presente artículo se presumen, sin admitir prueba en contrario, causantes de perjuicio al interés económico general en los términos del artículo 1º de la presente ley, y son nulas de nulidad absoluta.

Art. 3º — Quedan sometidas a las disposiciones de esta ley todas las personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, con o sin fines de lucro que realicen actividades económicas en todo o en parte del territorio nacional, y las que realicen actividades económicas fuera del país, en la medida en que sus actos, actividades o acuerdos puedan producir efectos en el mercado nacional.

A los efectos de esta ley, para determinar la verdadera naturaleza de los actos o conductas y acuerdos, atenderá a las situaciones y relaciones económicas que efectivamente se realicen, persigan o establezcan.

CAPÍTULO II

De la posición dominante

Art. 4º — A los efectos de esta ley se entiende que una o más personas gozan de posición dominante cuando para un determinado tipo de producto o servicio es la única oferente o demandante dentro del mercado nacional o en una o varias partes del mismo o, cuando sin ser la única no está expuesta a una competencia sustancial o, cuando por el grado de integración vertical u hori-

zontal está en condiciones de determinar la viabilidad económica de un competidor o participante en el mercado, en perjuicio de éstos.

Art. 5º — A fin de establecer la existencia de posición dominante en un mercado, deberán considerarse las siguientes circunstancias:

- a) El grado en que el bien o servicio de que se trate, es sustituible por otros, ya sea de origen nacional como extranjero; las condiciones de tal sustitución y el tiempo requerido para la misma;
- b) El grado en que las restricciones normativas limiten el acceso de productos u oferentes o demandantes al mercado de que se trate;
- c) El grado en que el presunto responsable pueda influir unilateralmente en la formación de precios o restringir el abastecimiento o demanda en el mercado y el grado en que sus competidores puedan contrarrestar dicho poder.

Art. 6º — Queda prohibida la enajenación de bienes o la prestación de servicios a precios inferiores a su costo sin razones fundadas en los usos y costumbres comerciales y con la finalidad de desplazar la competencia en el mercado o que produzca daños en la imagen o en el patrimonio o en el valor de las marcas de sus proveedores de bienes o de servicios. Esta práctica se presume, sin admitir prueba en contrario, causante de perjuicio al interés económico general en los términos del artículo 1º de la presente ley.

CAPÍTULO III

De las autorizaciones

Art. 7º — El Tribunal Nacional de Defensa de la Competencia podrá autorizar acuerdos o prácticas concertadas, sólo cuando:

- a) Contribuyan a mejorar el interés económico general y siempre que se traduzcan en evidentes ventajas para los usuarios y consumidores;
- b) No se consienta a las empresas partícipes la posibilidad de eliminar la competencia respecto de una parte sustancial del mercado involucrado;
- c) Se produzca un aumento de la productividad;
- d) Se mejore la calidad de los bienes o servicios ofrecidos;
- e) Se propicie la eficiencia y el desarrollo tecnológico o económico;
- f) No se elimine la competencia en el mercado regional de bienes o servicios afectos.

En estos supuestos el tribunal deberá convocar a audiencia pública, cuyo procedimiento será reglado por el respectivo decreto reglamentario.

Art. 8º — La autorización concedida deberá determinar con precisión las condiciones a las que ha sido sometida y el plazo por el que se la concede, debiendo en tal caso fijar el tribunal la fecha a partir de la cual tendrá efecto.

En caso de verificar el tribunal que han cambiado las circunstancias que motivaron el otorgamiento de una autorización, podrá revocarla o modificar las condiciones fijadas inicialmente. Asimismo, la autorización podrá ser revocada si los beneficiarios incumplieran las condiciones establecidas o si el tribunal comprobara que fueron otorgadas en base a datos relevantes aportados en forma incompleta o inexacta.

CAPÍTULO IV

De las concentraciones y fusiones

Art. 9º.— Están prohibidas las operaciones de concentración económica que tengan como consecuencia la adquisición o consolidación de una posición dominante en un mercado, de modo que pueda resultar perjuicio para el interés económico general.

A los efectos de esta ley se entiende por concentración económica la toma de control de una o varias empresas, a través de la realización de los siguientes actos:

- a) La fusión entre empresas;
- b) La transferencia de fondos de comercio;
- c) La adquisición de la propiedad o cualquier derecho sobre acciones o participaciones de capital o títulos de deuda que den cualquier tipo de derecho a ser convertidos en acciones o participaciones de capital o a tener cualquier tipo de influencia en las decisiones de la persona que los emita cuanto tal adquisición otorgue al adquirente el control de, o la influencia sustancial sobre la misma;
- d) La celebración de contratos de colaboración empresarial o constitución de cualquier tipo de sociedad temporaria de empresas;
- e) Cualquier otro acuerdo o acto que transfiera en forma fáctica o jurídica a una persona o grupo económico los activos de una empresa o le otorgue influencia determinante en la adopción de decisiones de administración ordinaria o extraordinaria de una empresa.

Art. 10.— Los actos indicados en el artículo anterior que cumplan con las pautas siguientes y que podrán ser actualizadas periódicamente por el Poder Ejecutivo, deberán ser comunicados al Tribunal Nacional de Defensa de la Competencia con por lo menos treinta (30) días de anticipación a su realización, de acuerdo con las siguientes condiciones y efectos:

- a) Al solo efecto registral, cuando a la unidad económica que resulte de la operación de concentración le corresponda la calificación de mediana empresa, en los términos de la resolución 401/89, sus complementarias y modificatorias, del Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos de la Nación o la norma que la reemplace;
- b) A efectos de solicitar la autorización al Tribunal, cuando a la unidad económica que resulte de la operación de concentración le corresponda la calificación de gran empresa, en los

términos de la resolución 401/89, sus complementarias y modificatorias, del Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos de la Nación o la norma que la reemplace;

- c) Asimismo, procederá el pedido de autorización cuando la unidad económica resultante de la operación de concentración tenga como actividad principal la producción o comercialización de bienes o la prestación de servicios no transables, y alcance una participación en el mercado igual o superior al 30 % (treinta por ciento), aun cuando le corresponda la calificación de mediana empresa, en los términos de la resolución 401/89, sus complementarias y modificatorias, del Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos de la Nación o la norma que la reemplace.

Sin perjuicio de lo expuesto, el tribunal podrá dentro de los quince (15) días de recibida la comunicación prevista en el inciso a) de este artículo, decidir fundadamente que el acto quede sujeto a autorización previa, por encuadrar potencialmente en los artículos 1º o 2º de la presente ley.

Art. 11.— El Tribunal Nacional de Defensa de la Competencia fijará con carácter general la información y antecedentes que las personas deberán proveer al tribunal y los plazos en que dicha información y antecedentes deben ser provistos.

Art. 12.— La reglamentación establecerá la forma y contenido adicional de la notificación de los proyectos de concentración económica y operaciones de control de empresas de modo que se garantice el carácter confidencial de las mismas.

Art. 13.— En todos los casos previstos en este capítulo el Tribunal Nacional de Defensa de la Competencia podrá, de considerarlo conveniente, llamar a audiencia pública. A tal fin el tribunal pondrá a disposición de quienes deseen participar en dichas audiencias los antecedentes del acto sometido a autorización, excepto la documentación que haya sido acompañada por las partes con la indicación de confidencial, en cuyo caso el tribunal por decisión fundada resolverá al respecto.

Art. 14.— En todos los casos sometidos a autorización, el tribunal por resolución fundada, deberá decidir dentro de los sesenta (60) días de presentada la solicitud y documentación respectiva bajo apercibimiento —en caso de incumplimiento—, de lo previsto en el artículo 45 inciso d) de la presente ley:

- a) Autorizar la operación;
- b) Subordinar el acto al cumplimiento de las modificaciones que el mismo tribunal establezca;
- c) Denegar la autorización.

Art. 15.— Transcurrido el plazo previsto en el artículo anterior sin mediar resolución al respecto, la operación se tendrá por autorizada tácitamente. La autorización tácita producirá en todos los casos los mismos efectos legales que la autorización expresa.

Art. 16. — Cuando la concentración económica involucre a empresas o personas cuya actividad económica esté reglada por el Estado nacional a través de un organismo de control o regulador, el Tribunal Nacional de Defensa de la Competencia, previo al dictado de su resolución, deberá requerir a dicho ente estatal un informe y opinión fundada sobre la propuesta de concentración económica en cuanto al impacto sobre la competencia en el mercado respectivo o sobre el cumplimiento del marco regulatorio respectivo. El ente estatal deberá pronunciarse en el término máximo de quince (15) días, transcurrido dicho plazo se entenderá que el mismo no objeta la operación. La opinión del ente de contralor o regulador no será vinculante para el tribunal, aunque deberá ser debidamente valorada en los fundamentos de su resolución.

CAPÍTULO V

Autoridad de aplicación

Art. 17. — Créase como órgano autónomo en el ámbito de la Secretaría de Industria, Comercio y Minería del Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos de la Nación el Tribunal Nacional de Defensa de la Competencia, con el fin de aplicar y controlar el cumplimiento de esta ley. Tendrá su sede en la Ciudad de Buenos Aires pero podrá actuar, constituirse o sesionar en cualquier lugar de la República mediante delegaciones fijas o móviles.

Art. 18. — El Tribunal Nacional de Defensa de la Competencia estará integrado por siete (7) miembros con suficientes antecedentes e idoneidad para ejercer el cargo, con más de cinco (5) años en el ejercicio de la profesión. Los miembros del tribunal tendrán dedicación exclusiva durante su mandato, con excepción de la actividad docente.

Los integrantes del tribunal deberán excusarse por las causas previstas en los incisos 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9 y 10 del artículo 17 del CPCCN.

Art. 19. — Los miembros del tribunal serán designados por el Poder Ejecutivo nacional previo concurso público de antecedentes y oposición ante un jurado integrado por el procurador del Tesoro de la Nación, los secretarios de Industria, Comercio y Minería y de Obras y Servicios Públicos, ambos del Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos de la Nación, y los presidentes de las comisiones de Comercio de ambas Cámaras del Poder Legislativo de la Nación.

Art. 20. — Los miembros del tribunal durarán en el ejercicio de sus funciones seis (6) años. La renovación de los mismos se hará por mitades cada tres años y podrán ser reelegidos. Sólo podrán ser removidos previa decisión —por mayoría simple— de un jurado integrado por los funcionarios mencionados en el artículo anterior.

La causa por remoción se formará obligatoriamente si existe acusación del Poder Ejecutivo nacional o del presidente del tribunal y sólo por decisión del jurado si la causa tuviera cualquier otro origen.

El jurado dictará normas de procedimiento que aseguren el derecho de defensa y debido trámite de la causa.

Art. 21. — Son causas de remoción de los miembros del tribunal:

- a) Mal desempeño en sus funciones;
- b) Negligencia reiterada que dilate la sustanciación de los procesos;
- c) Incapacidad sobreviniente;
- d) Condena por delito doloso;
- e) Violaciones de las normas sobre incompatibilidad;
- f) No excusarse en los presupuestos previstos por el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación.

Art. 22. — Será suspendido preventivamente y en forma inmediata en el ejercicio de sus funciones aquel integrante del tribunal sobre el que recaiga auto de procesamiento por delito doloso.

Art. 23. — Créase en el ámbito del Tribunal Nacional de Defensa de la Competencia el Registro Nacional de Defensa de la Competencia, en el que deberán inscribirse las operaciones de concentración económica previstas en el capítulo IV y las resoluciones definitivas dictadas por el tribunal. El registro será público.

Art. 24. — Son funciones y facultades del Tribunal Nacional de Defensa de la Competencia:

- a) Realizar los estudios e investigaciones de mercado que considere pertinentes. Para ello podrá requerir a los particulares y autoridades nacionales, provinciales o municipales la información, documentación o colaboración que juzgue necesarios;
- b) Celebrar audiencias con los presuntos responsables, denunciantes, damnificados, testigos y peritos, recibirles declaración y ordenar careos, para lo cual podrá solicitar el auxilio de la fuerza pública;
- c) Realizar las pericias necesarias sobre libros, documentos y demás elementos conducentes a la investigación, controlar existencias, comprobar orígenes y costos de materias primas u otros bienes;
- d) Solicitar al juez en lo penal económico de la Capital Federal o al juez federal competente en el interior en cualquier estado del proceso como medida preventiva que las personas físicas imputadas ya sea directa o por su participación o cooperación en los casos de personas de existencia ideal no puedan ausentarse del país sin previa autorización. El juez deberá resolver el pedido del tribunal en el plazo de veinticuatro (24) horas;
- e) Imponer las sanciones establecidas en la presente ley;
- f) Promover el estudio y la investigación en materia de competencia;
- g) Cuando lo considere pertinente emitir opinión en materia de competencia y libre concurrencia respecto de leyes, reglamentos, circulares y actos administrativos, sin que tales opiniones tengan efectos vinculantes;

- h) Emitir recomendaciones de carácter general o sectorial respecto a las modalidades de la competencia en los mercados;
- i) Actuar con las dependencias competentes en la negociación de tratados, acuerdos o convenios internacionales en materia de regulación o políticas de competencia y libre concurrencia;
- j) Elaborar su reglamento interno;
- k) Organizar el Registro Nacional de la Competencia creado por esta ley;
- l) Promover e instar acciones ante la justicia, para lo cual designará representante legal a tal efecto;
- ll) Suspender los plazos procesales de la presente ley por resolución fundada;
- m) Acceder a los lugares objeto de inspección con el consentimiento de los ocupantes o mediante orden judicial, la que será solicitada por el tribunal ante el juez competente, quien deberá resolver en el plazo de 24 horas;
- n) Solicitar al juez competente las medidas cautelares que estime pertinentes, las que deberán ser resueltas en el plazo de 24 horas;
- ñ) Suscribir convenios con organismos provinciales o municipales para la habilitación de oficinas receptoras de denuncias en las provincias;
- o) Efectuar contrataciones de personal para la realización de trabajos específicos o extraordinarios que no puedan ser realizados por su planta permanente, fijando las condiciones de trabajo y su retribución.

CAPÍTULO VI

Del presupuesto

Art. 25. — El Tribunal Nacional de Defensa de la Competencia formulará anualmente el proyecto de presupuesto para su posterior elevación al Poder Ejecutivo nacional.

El tribunal establecerá la fijación de aranceles que deberán abonar los interesados por las actuaciones que inician ante el mismo. Su producido será destinado a sufragar los gastos ordinarios del organismo.

CAPÍTULO VII

Del procedimiento

Art. 26. — El procedimiento se iniciará de oficio o por denuncia realizada por cualquier persona física o jurídica, pública o privada.

Art. 27. — Todos los plazos de esta ley se contarán por días hábiles administrativos.

Art. 28. — La denuncia deberá contener el detalle de los hechos que se imputan y su fundamentación. El tribunal podrá desestimar por resolución fundada la denuncia cuando de su sola exposición resultare que los hechos no encuadran en las previsiones de la presente ley.

Art. 29. — Si el tribunal estimare que la denuncia es pertinente correrá traslado por diez (10) días al presunto responsable para que dé las explicaciones que estime conducentes. En caso de que la instrucción se iniciare de oficio se correrá traslado de la relación de los hechos y la fundamentación que lo motivaron.

Art. 30. — Evacuada la vista el tribunal resolverá sobre la procedencia de la instrucción sumarial.

Art. 31. — Si el tribunal considera satisfactorias las explicaciones, o si concluida la instrucción no hubiere mérito suficiente para la prosecución del procedimiento se dispondrá su archivo.

Art. 32. — Concluida la instrucción el tribunal notificará a los presuntos infractores para que en un plazo de quince (15) días efectúen su descargo y ofrezcan la prueba que consideren pertinente.

Art. 33. — Las decisiones del tribunal en materia de prueba son irrecurribles.

Art. 34. — Concluido el período de prueba, que será de noventa (90) días, o transcurrido el plazo para realizarlo, las partes podrán alegar en el plazo de tres (3) días sobre el mérito de la misma. El tribunal dictará resolución en un plazo máximo de sesenta (60) días. La resolución del tribunal pone fin a la vía administrativa.

Art. 35. — El tribunal en cualquier estado del procedimiento podrá imponer el cumplimiento de condiciones que establezca u ordenar el cese o la abstención de la conducta lesiva. Cuando se pudiere causar una lesión irreparable al régimen de competencia podrá ordenar las medidas que según las circunstancias fueren más aptas para prevenir dicha lesión. Contra esta resolución podrá interponerse recurso de apelación con efecto devolutivo, en la forma y términos previstos en los artículos 50 y 51.

En igual sentido podrá disponer de oficio o a pedido de parte la suspensión, modificación o revocación de las medidas dispuestas en virtud de circunstancias sobrevinientes o que no pudieron ser conocidas al momento de su adopción.

Art. 36. — Hasta el dictado de la resolución del artículo 34 el presunto responsable podrá comprometerse al cese inmediato o gradual de los hechos investigados o la modificación de aspectos relacionados con ello.

El compromiso estará sujeto a la aprobación del Tribunal Nacional de Defensa de la Competencia a los efectos de producir la suspensión del procedimiento.

Transcurridos tres (3) años del cumplimiento del compromiso del presente artículo, se archivarán las actuaciones.

Art. 37. — El tribunal podrá de oficio o a instancia de parte aclarar conceptos oscuros o suplir cualquier omisión que contengan sus resoluciones.

Art. 38. — El Tribunal Nacional de Defensa de la Competencia decidirá la convocatoria a audiencias cuando lo considere oportuno para la marcha de las investigaciones.

Art. 39. — La decisión del Tribunal Nacional de Defensa de la Competencia respecto de la realización de la audiencia deberá contener, según corresponda:

- a) Identificación de la investigación en curso;
- b) Carácter de la audiencia;
- c) Objetivo;
- d) Fecha, hora y lugar de realización;
- e) Requisitos para la asistencia y participación.

Art. 40. — Las audiencias deberán ser convocadas con una antelación mínima de veinte (20) días y notificadas a las partes acreditadas en el expediente en un plazo no inferior a quince (15) días.

Art. 41. — La convocatoria a audiencia pública deberá ser publicada en el Boletín Oficial con una antelación mínima de diez (10) días. Dicha publicación deberá contener, al menos, la información prevista en el artículo 39.

Art. 42. — El tribunal dará intervención como parte coadyuvante en los procedimientos que se sustancien ante el mismo, a los afectados de los hechos investigados, a las asociaciones de consumidores y asociaciones empresarias reconocidas legalmente, a las provincias y a toda otra persona que pueda tener un interés legítimo en los hechos investigados.

Art. 43. — El tribunal podrá requerir dictámenes sobre los hechos investigados a personas físicas o jurídicas de carácter público o privado de reconocida versación.

Art. 44. — Las resoluciones que establecen sanciones del tribunal, una vez notificadas a los interesados y firmes, se publicarán en el Boletín Oficial y cuando aquél lo estime necesario en los diarios de mayor circulación del país a costa del sancionado.

CAPÍTULO VIII

De las sanciones

Art. 45. — Las personas físicas o de existencia ideal que no cumplan con las disposiciones de esta ley, serán pasibles de las siguientes sanciones:

- a) El cese de los actos o conductas previstas en los capítulos I y II y, en su caso, la remoción de sus efectos;
- b) Los que realicen los actos prohibidos en los capítulos I, II y IV serán sancionados con una multa de un mil pesos (\$ 1.000) hasta ciento cincuenta millones de pesos (\$ 150.000.000), que se graduará en base a: 1. La pérdida incurrida por todas las personas afectadas por la actividad prohibida; 2. El beneficio obtenido por todas las personas involucradas en la actividad prohibida; 3. El valor de los activos involucrados de las personas indicadas en el punto 2. precedente, al momento en que se cometió la violación o de los ingresos brutos de todas aquéllas. En cada caso se tomará la base que arroje una cuantía mayor. En caso de reincidencia, los montos de la multa se duplicarán;

c) Sin perjuicio de otras sanciones que pudieren corresponder, cuando se verifiquen actos que constituyan abuso de posición dominante o cuando se constate que se ha adquirido o consolidado una posición monopólica u oligopólica en violación de las disposiciones de esta ley, el tribunal podrá imponer el cumplimiento de condiciones que apunten a neutralizar los aspectos distorsivos sobre la competencia o solicitar al juez competente que las empresas infractoras sean disueltas, liquidadas, desconcentradas o divididas.

d) Los que no cumplan con lo dispuesto en los artículos 10, 14, 35 y 36 serán pasibles de una multa de hasta cinco mil pesos (\$ 5.000) diarios, contados desde el vencimiento de la obligación de notificar los proyectos de concentración económica o desde el momento en que se incumple el compromiso o la orden de cese o abstención. Ello sin perjuicio de las demás sanciones que pudieren corresponder.

Art. 46. — Las personas de existencia ideal son imputables por las conductas realizadas por las personas físicas que hubiesen actuado en nombre, con la ayuda o en beneficio de la persona de existencia ideal, y aun cuando el acto que hubiese servido de fundamento a la representación sea ineficaz.

Art. 47. — Cuando las infracciones previstas en esta ley fueren cometidas por una persona de existencia ideal, la multa también se aplicará solidariamente a los directores, gerentes, administradores, síndicos o miembros del Consejo de Vigilancia, mandatarios o representantes legales de dicha persona de existencia ideal que por su acción o por la omisión de sus deberes de control, supervisión o vigilancia hubiesen contribuido, alentado o permitido la comisión de la infracción.

En tal caso, se podrá imponer sanción complementaria de inhabilitación para ejercer el comercio de uno (1) a diez (10) años a la persona de existencia ideal y a las personas enumeradas en el párrafo anterior.

Art. 48. — El tribunal en la imposición de multas deberá considerar la gravedad de la infracción, el daño causado, los indicios de intencionalidad, la participación del infractor en el mercado, el tamaño del mercado afectado, la duración de la práctica o concentración y la reincidencia o antecedentes del responsable, así como su capacidad económica.

Art. 49. — Los que obstruyan o dificulten la investigación o no cumplan los requerimientos del tribunal podrán ser sancionados con multas de hasta quinientos pesos (\$ 500) diarios. Cuando a juicio del tribunal se haya cometido la infracción mencionada, se dará vista de la imputación al presunto responsable, quien deberá efectuar los descargos y ofrecer pruebas en el plazo de cinco días.

Art. 50. — Las personas físicas o jurídicas damnificadas por los actos prohibidos por esta ley, podrán ejercer la acción de resarcimiento de daños y perjuicios conforme las normas del derecho común, ante el juez competente en esa materia.

CAPÍTULO IX

De las apelaciones

Art. 51. — Son apelables aquellas resoluciones dictadas por el tribunal que ordenen:

- a) La aplicación de las sanciones de multa;
- b) El cese o la abstención de una conducta;
- c) La oposición o condicionamiento respecto de los actos previstos en el capítulo IV;
- d) La desestimación de la denuncia por parte del Tribunal de Defensa de la Competencia;
- e) La resolución que dispone el sobreseimiento del denunciado.

Las apelaciones previstas en el inciso a) se otorgarán con efecto suspensivo, y la de los incisos b), c), d) y e) se concederán con efecto devolutivo.

Art. 52. — El recurso de apelación deberá interponerse y fundarse ante el Tribunal Nacional de Defensa de la Competencia dentro del plazo de quince (15) días de notificada la resolución. Dicho tribunal dentro de los cinco (5) días de interpuesto el recurso deberá elevar el expediente a la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal Económico de la Ciudad de Buenos Aires o a la Cámara Federal que corresponda en el interior del país.

CAPÍTULO X

De la prescripción

Art. 53. — Las acciones que nacen de las infracciones previstas en esta ley prescriben a los cinco (5) años.

Art. 54. — Los plazos de prescripción se interrumpen con la denuncia o por la comisión de otro hecho sancionado por la presente ley.

CAPÍTULO XI

Disposiciones transitorias y complementarias

Art. 55. — Será de aplicación en los casos no previstos por esta ley y su reglamentación el Código Penal de la Nación, el Código Procesal Penal y el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación en cuanto sean compatibles con las disposiciones de esta ley.

Art. 56. — No serán aplicables a las cuestiones regidas por esta ley las disposiciones de la ley 19.549.

Art. 57. — Quedan exceptuados de la aplicación de la presente ley los medios de comunicación en lo que respecta a la irrestricta libertad de prensa e información, no así cuando se tratare de conductas o prácticas económicas que importen la obtención de ventajas que afecten la libre competencia.

Art. 58. — Derógase la ley 22.262. No obstante ello, las causas en trámite a la fecha de entrada en vigencia de la presente ley, continuarán tramitando de acuerdo a sus disposiciones.

Art. 59. — Queda derogada toda atribución de competencia relacionada con el objeto y finalidad de esta ley otorgada a otros organismos o entes estatales.

Art. 60. — El Poder Ejecutivo reglamentará la presente ley, en el término de ciento veinte (120) días, computados a partir de su publicación.

Art. 61. — Comuníquese al Poder Ejecutivo.

*Rodolfo F. Gabrielli. — Sergio E. Acevedo.
— Miguel A. Alterach. — César Arias. —
Carmen del Rosario Caillet. — Mario Das
Neves. — Emilio R. Martínez Garbino. —
Edmundo del Valle Soria. — Oscar Sat.*